TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil
veintidós (2022).

Ref: Exp. 25899-31-03-001-2022-00082-01.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 21 de abril último proferido por el juzgado primero civil del circuito de Zipaquirá dentro del proceso verbal promovido por Jorge Aurelio Garzón Peña, Delia Góngora Sastoque, Yuri, Diana Marcela, Alex Fernando, Olga Patricia, Anderson Jesid y Jeferson Steven Garzón Góngora, Jorge Orlando Sandoval y Nivia Yanec Beltrán Gómez contra Juan Carlos Mesa Vélez y Jesús Antonio Zapata Valencia, por el cual denegó la medida cautelar solicitada por dicho extremo procesal, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

Con la demanda que pidió declarar que los demandados son solidariamente y extracontractualmente responsables de los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 10 de febrero de 2021, en el que perdió la vida Wilson Giovanni Garzón Góngora, solicitaron los demandantes decretar el embargo de los dineros que los demandados tengan depositados en las diferentes entidades financieras y del tractocamión, marca Freightliner, de placas SRN-235.

Mediante el proveído apelado, el a-quo decretó la inscripción de la demanda sobre el antecitado automotor, a la par que denegó los embargos solicitados por ‘improcedentes’, sobre la base de que se trata de un proceso

de carácter declarativo, amén de que no se pidió ninguna medida innominada diferente para la protección del derecho objeto de litigio.

Contra esa decisión interpusieron los demandantes recurso de reposición y, subsidiariamente, de apelación; frustráneo el primero, se concedió el segundo en el efecto devolutivo, el que se apresta el Tribunal a desatar.

II.- El recurso de apelación

Lo despliegan sobre la idea de que las medidas cautelares solicitadas resultan procedentes a título de ‘innominadas’, porque repasando el contenido del libelo es posible colegir no sólo la legitimación que les asiste, sino también la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de éstas, aspecto en el que debe repararse en el peligro que corren por cuenta del tiempo que pueda demorarse el proceso y la condena que se les imponga a los demandados no pueda hacerse exigible, en la medida en que la cautela decretada es insuficiente en el propósito de garantizar la materialización de esa reparación justa que pretenden.

Consideraciones

Las medidas cautelares, debe memorarse, están concebidas en la ley con el propósito de proteger el “*derecho material objeto de controversia dentro del litigio, en aras de que se cumplan los principios constitucionales de eficacia y debida administración de justicia; es por ello que su existencia, por supuesto, tiene relación directa con la médula del proceso mientras este perdure, con miras a que se logre emitir una sentencia que no resulte inútil y que pueda ser cumplida*” (Cas. Civil, sentencia de 3 de febrero de 2016, exp. 2016-00103-00).

Es por ello que el precepto 590 del estatuto general del proceso autoriza como medida cautelar en los procesos declarativos, previa solicitud de la parte demandante y desde la presentación del libelo incoativo, “la

inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes”, o cuando “en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual”, con el fin de garantizar que una eventual sentencia estimatoria no vaya a ser ilusoria, al punto que si el fallo es favorable a los intereses del actor, es posible ordenar el embargo y secuestro de los sobredichos bienes.

Aquí, encontrando el juzgador que con la demanda se pide el reconocimiento de los perjuicios derivados de la responsabilidad que se le endilga a los demandados, decretó la medida que consideró procedente de cara a ese mandato, consideración que controvierten los demandantes alegando que el embargo y secuestro solicitados vienen procedentes respecto de la finalidad del proceso, especialmente si se tiene en cuenta la apariencia de buen derecho y proporcionalidad de aquéllas, cuyo objetivo está en garantizar el pago de una eventual condena a título de indemnización.

Y claro, es verdad que el literal c) del numeral 1º del antecitado artículo autoriza al juez a decretar “[c]ualquiera otra medida” que “*encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión*”, que es lo que da vida a las llamadas medidas cautelares innominadas, acepción que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa que “*no tiene nombre especial*”, es decir, que ese trata de medidas cautelares que no se encuentran específicamente descritas en la ley.

Mas, una cosa es que el juez pueda adoptar medidas que considere proporcionales y razonables de acuerdo con la apariencia de buen derecho, así como de la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, y, otra muy

diferente, que esa permisión sea una compuerta para hacer extensibles las medidas cautelares que sí están previstas por el legislador, a procesos en los que éste se guardó de permitir las.

Así lo ha señalado la doctrina autorizada, haciendo ver que a éstas se les puede apellidar como *“atípicas genéricas, o innominadas y aún abstractas, pues a diferencia de las cautelas ortodoxas del derecho privado, no son taxativas, su regulación ni su nombre aparecen en detalle en el ordenamiento. Se trata de providencias, resguardos o medidas que puede tomar el juez, a petición de parte, y con el objeto de garantizar que la sentencia pueda tener cumplido efecto. Ellas, al igual que las medidas típicas son instrumentales a la realización materia de la sentencia, a la utilidad del proceso y a que la sentencia del juez no sea un rey de burlas, escrita apenas como ejercicio intelectual pero sin ninguna incidencia en la realidad. Para el ciudadano que recibe formalmente el beneficio del derecho, pero cuya sentencia favorable nunca se cumple, no hay Constitución. Son estas cautelas medidas inespecíficas de creación de la parte demandante, al juez apenas le corresponde juzgar su utilidad, proporcionalidad y pertinencia para la realización del derecho que la sentencia contingentemente habrá de reconocer”* (Villamil Portilla, Edgardo; Algunos apuntes acerca de las cautelas en el Código General del Proceso; Memorias XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal; 2012).

Criterio que ha prohiado la jurisprudencia constitucional, enfatizando en que *“[u]no de los elementos distintivos de las medidas cautelares es su carácter restringido con relación a las medidas nominadas, el cual no se ha perdido ante la entrada en vigencia del Código General del Proceso, pues en el Libro Cuarto, Título I, Capítulo I de dicha reglamentación, expresamente se prevén las cautelas pasibles de ser ordenadas dentro de los distintos trámites, precisándose su procedencia dependiendo del tipo de litigio (declarativo, ejecutivo, ‘de familia’) y de las especiales circunstancias como se halle”*.

“Las cautelas continúan siendo, como en la anterior normatividad procesal civil, la inscripción de la

demanda sobre bienes sujetos a registro, el embargo y/o el secuestro; empero, además, se establece la procedencia de las llamadas innominadas y las previstas para los ‘procesos de familia’ (art. 598, C.G.P.)”.

“Tal categorización revela la existencia de una reglamentación propia para cada tipo de medida e impide concluir que la inclusión de las innominadas entraña las específicas y singulares, históricamente reglamentadas con identidad jurídica propia, pues de haberse querido ello por el legislador, nada se habría precisado en torno a la pertinencia y características de las ya existentes (inscripción de la demanda, embargo y secuestro) y tampoco se habrían contemplado las particularidades de las nuevas medidas introducidas” (Cas. Civ. Sent. de 8 de noviembre de 2019, exp. STC1813-2018).

De donde debe comprenderse, *“atendiendo la preceptiva del artículo 590 del Código General del Proceso, literal c)”*, que *“cuando autoriza como decisión cautelar ‘(...) cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio (...)’ (subraya fuera de texto) implica entender que se está refiriendo a las atípicas, diferentes a las señaladas en los literales a) y b), las cuales sí están previstas legalmente para casos concretos; de consiguiente, los requisitos establecidos para el decreto de las medidas innominadas no pueden ser extensivos para aquéllas existentes con categorización e identidades propias (inscripción de la demanda, embargo y secuestro); amén de la clara autonomía que dimana del numeral 1 del art. 590 del C. G. del P, en relación con cada uno de los literales: a), b) y c)”* (Cas. Civ. Sent. de 23 de junio de 2020, exp. STC3917-2020), lo que de suyo descarta un decreto cautelar como el que se plantea en el recurso, sobre todo si en la cuenta se tiene que así la inscripción de la demanda no saque los bienes del comercio, sí cumple con el efecto de dar *“publicidad del litigio, a fin de que los terceros adquirentes no puedan ampararse en la presunción de buena fe’ (...)* *‘una vez decretada esa medida y anotada en el registro respectivo, la persona que adquiriera la titularidad del bien con posterioridad a ese acto queda vinculada a las resultas del proceso aunque éste no se haya promovido en su contra, sin necesidad de citación de*

ninguna índole, pues la sentencia claramente le es oponible dado que se presume de derecho que los negocios que realizó respecto del bien se hicieron con el conocimiento de la existencia del litigio, lo que significa que aceptó las consecuencias que se derivan de éste” (Cas. Civ. Sent. de 20 de febrero de 2013, exp. T-2013-00273-00).

Baste lo discurrido para confirmar el auto combatido; no habrá condena en costas, por estar los demandantes cobijados con amparo de pobreza.

III.- Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto impugnado de fecha y procedencia preanotados.

Sin costas.

Oportunamente, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

German Octavio Rodriguez Velasquez

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 004 Civil Familia

Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c097e128e614715aaa4f9b056eca032881c7f56c181d515b67febd6ebde29621**

Documento generado en 12/08/2022 10:08:33 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>